

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, treinta y uno (31) de julio de dos mil veinte (2020)

AUTO INTERLOCUTORIO No. 211

MAGISTRADO PONENTE: EDUARDO ANTONIO LUBO BARROS

MEDIO DE CONTROL:	CONTRACTUAL
EXPEDIENTE:	76111-33-33-002- 2019-00056-01
DEMANDANTE:	ANGELA MARIA GIRON POSSO
DEMANDADO:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO DEPARTAMENTAL
ASUNTO	PROVOCAR CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIAS ANTE EL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE VALLE DEL CAUCA

I. OBJETO DE LA DECISION

Encontrándose el presente asunto pendiente de resolver el recurso de apelación, propuesto por la parte demandante, contra el auto interlocutorio nro. 381 del 12 de agosto de 2019¹, proferido por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Buga, mediante el cual se rechazó la demanda por no haber sido subsanada según los lineamientos planteados en el auto inadmisorio, la Sala de decisión avizora que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no es la competente para conocer el asunto y por tanto, en garantía al acceso de administración de justicia suscitará el conflicto negativo de competencias ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Valle del Cauca.

¹ Ver folio 22 C-1



II. ANTECEDENTES

Inicialmente la señora Angela María Girón Posso, a través de apoderado judicial presentó demanda de restitución de bien inmueble ante los Juzgado Civiles Municipales de Tuluá, y solicitó se declare que entre las partes Junta de Acción Comunal del Barrio Departamental de Tuluá y la señora Francys Derlys Vidales y Ever Antonio Palacio existe un contrato de comodato precario desde el 15 de agosto de 2013 hasta el momento de la presentación de la demanda, respecto del bien inmueble y ubicado en la carrera 20 nro. 12-63 del Municipio de Tuluá.

De igual forma solicitó, se de por terminado el contrato de comodato precario del bien inmueble ubicado en zona urbana en la dirección antes enunciada, y en consecuencia, se condene a los demandados restituir al demandante Junta de Acción Comunal del Barrio Departamental de Tuluá.

Posteriormente, mediante providencia del 9 de agosto de 2018², el Juzgado Segundo Municipal de Tuluá resolvió rechazar la demanda por carecer de competencia para conocer del asunto, disponiendo su remisión a los Juzgados Administrativos (Reparto) de Guadalajara de Buga, lo anterior al considerar que el certificado de tradición del bien inmueble en litigio estipulaba que el mismo era de propiedad del Municipio de Tuluá y por tratarse de una entidad pública la controversia que se suscita debe ser estudiada ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Inconforme con la decisión anterior, la parte demandante presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación, considerando que ninguna de las partes procesales que están involucradas en la demanda es una entidad pública, pues la demanda se presentó por la Junta de Acción Comunal del Barrio Departamental contra la señora Francys Delis Vidales y otros; además de indicar que si eventualmente el Municipio de Tuluá tendría capacidad por pasiva en la causa, no tendría capacidad procesal habida consideración, que la relación sustancial (Comodato Precario) no involucro a esta entidad, lo que conllevaría a una sentencia inhibitoria, por falta de capacidad por pasiva en la causa.

² Ver folio 108 C-1



Mediante auto nro. 1073 del 3 de septiembre de 2018³ el Juzgado Segundo Civil Municipal de Tuluá, resolvió los recursos interpuestos por la parte demandante, insistiendo que por tratarse de la discusión de un contrato de comodato para la restitución de bien inmueble que se encuentra en cabeza del Municipio de Tuluá, quien debe conocer del asunto es el Juez Administrativo. Concediendo finalmente el recurso de apelación ante el superior.

Dicho recurso de apelación fue resuelto el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Tuluá mediante auto nro. 217 del 18 de febrero de 2019⁴, donde se dispuso que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de CGP, la providencia que rechaza la demanda por falta de competencia funcional no es susceptible de recurso alguno, por consiguiente, consideró que el medio de impugnación interpuesto se tornaba improcedente.

Una vez la demanda es remitida a esta jurisdicción, el conocimiento del asunto es asumido por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Buga, quien mediante auto nro. 217 del 28 de mayo de 2019⁵, dispuso inadmitir la demanda para que fuera adaptada a los lineamientos establecidos en Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, incluyendo el poder conferido, anexando además los respectivos traslados físicos, magnéticos y la constancia del trámite de la conciliación extrajudicial.

Mediante escrito del 12 de junio de 2019⁶ el apoderado de la parte demandante explica nuevamente las razones por la cuales la jurisdicción ordinaria es la competente para conocer del asunto y solicita que el Juez proponga el conflicto negativo de competencia antes de proceder al rechazo de la demanda por no haber sido subsanada.

Finalmente, mediante auto interlocutorio nro. 381 del 12 de agosto de 2019⁷ el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Buga, dispuso rechazar la presente demanda por no haber sido subsanada, inconforme con tal decisión el apoderado presenta recurso de

³ Ver folios 135 y 136 C-1

⁴ Ver folios 6 a 9 C-2

⁵ Ver folio 13 C-2

⁶ Ver folios 15 a 20 C-2

⁷ Ver folio 22 C-2



apelación.

III. LA PROVIDENCIA APELADA.

Mediante auto nro. 381 del 12 de agosto de 2019⁸, el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Buga, resolvió rechazar la demanda al considerar que pese a que el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Tuluá y dicho despacho, expusieron las razones en derecho del porque el demandante debía acudir a esta jurisdicción, el mismo no atendió lo dispuesto por estos servidores judiciales, limitándose a manifestar que los actores corresponden a personas naturales, sin anotar que el inmueble es propiedad de la entidad territorial municipal, ni mucho menos presentando escrito de subsanación.

IV. FUNDAMENTOS DEL RECURSO:

Inconforme con la decisión anterior, el apoderado judicial de la parte demandante interpuso recurso de apelación manifestando (transcripción literal) que:

"...Colofón de lo antes expuesto, ruego al Despacho, fije sus ojos, en las partes que integran la litis, los hechos y las pretensiones y encontrará que en ningún momento se involucra a entidad alguna del estado. Obsérvese que la pretensión nro. 1 de la demanda es que "se declare que entre las partes Junta de Acción Comunal del Barrio Departamental de Tuluá y la señora Francys Derlys Vidales y Ever Antonio Palacio existe un contrato de comodato precario", en momento alguno se está involucrando, en ninguno de los extremos procesales entidad alguna del estado.

(...)

Igualmente se duele el a quo, de "Pese a que el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Tuluá y este Despacho, expusieron las razones en derecho del porque el demandante debía acudir a esta jurisdicción, el mismo no atendió lo dispuesto por estos servidores judiciales". La verdad es que este argumentó no obedece a la verdad, pues como ya lo dije el Juzgado 2° del Circuito no dijo nada de eso, es más ni siquiera el Juzgado 2° administrativo hizo pronunciamiento alguno de fondo para inadmitir la demanda, pues en el auto 217, para inadmitirla sin mayor reflexión les dio crédito a unos argumentos, NO, expuesto por el Juzgado 2° Civil del

⁸ Ver folio 22 C-2



Circuito de Tuluá, y, por ende, sin señalar la causal de inadmisión, la inadmitió.

Por las razones acabadas de exponer, retiro que el Juez no leyó completamente el memorial que presentó el suscrito abogado, puesto que, en él, de manera amplia expuse las razones de hecho y derecho, por las que la jurisdicción que debe conocer de este asunto es la jurisdicción ordinaria, que son las mismas que reitero en este recurso es la jurisdicción ordinaria, que son las mismas que reitero en este recurso de apelación, y que son las mismas que expuse en el punto 5° de este escrito, del cual ruego al Ad quem, las lea, y lo interprete adecuadamente.

La verdad es que el suscrito litigantes, (...) no alcanzo a entender, de que manera, adaptándose la presente demanda para tramitarla como proceso de controversias contractuales, sería resuelto el contrato de comodato precario, no imagino una sentencia de la jurisdicción contenciosa administrativa dirimiendo un conflicto exclusivamente de personas particulares.

Es que el asunto no es que la propiedad sea o no de una entidad pública, pues ese asunto no se discute, lo que se discute es la restitución de un bien inmueble reclamado por una persona particular (Junta comunal) a una persona particular.

Aquí no hay una demanda reivindicatoria, donde es válido acreditar quien es el dueño, se trata de la restitución de un bien inmueble en virtud de un contrato precario, donde no se requiere acreditar la calidad de dueño.

(...)

Dejo a consideración de los magistrados del Tribunal Contencioso Administrativo del Valle el presente recurso de apelación, para que ordene al a quo que motive adecuadamente su providencia y plantee el conflicto de competencia para que sea el consejo de la judicatura, la que dirima el competente para conocer de la demanda de restitución de bien inmueble. De cerrarse este mecanismo se me está obstruyendo el libre acceso a la administración de justicia, aunque de hecho ya se obstruyó, pero debo acudir a este recurso de impugnación para que sea la misma jurisdicción contenciosa quien tenga la posibilidad de corregir su yerro, antes de ejercer cualquier acción constitucional."⁹

⁹ Ver folios 24 a 31 C-2



III. CONSIDERACIONES

3.1. PROBLEMA JURÍDICO

El asunto que se discute se contrae a establecer:

- ¿Si es procedente revocar el auto que rechazó la demanda por no subsanar, para en su lugar provocar el conflicto negativo de competencia de acuerdo al objeto del litigio?

3.2. TESIS

En el presente caso, resulta procedente suscitar el conflicto negativo de competencia y en consecuencia, declarar la nulidad de lo actuado por el a quo, por carecer de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, pues tal como lo alega el apelante en el presente asunto el conflicto de suscita entre dos particulares, sin la intervención de una entidad pública.

3.1. CASO CONCRETO

El CPACA en su artículo 153¹⁰ en concordancia con el artículo 243¹¹ establece que los Tribunales Administrativos en segunda instancia,

¹⁰ **"ARTÍCULO 153. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS EN SEGUNDA INSTANCIA.** Los tribunales administrativos conocerán en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda."

¹¹ **"ARTÍCULO 243. APELACIÓN.** Son apelables las sentencias de primera instancia de los Tribunales y de los Jueces. También serán apelables los siguientes autos proferidos en la misma instancia por los jueces administrativos:

1. El que rechace la demanda.
2. El que decrete una medida cautelar y el que resuelva los incidentes de responsabilidad y desacato en ese mismo trámite.
3. El que ponga fin al proceso.
4. El que apruebe conciliaciones extrajudiciales o judiciales, recurso que solo podrá ser interpuesto por el Ministerio Público.
5. El que resuelva la liquidación de la condena o de los perjuicios.
6. El que decreta las nulidades procesales.
7. El que niega la intervención de terceros.
8. El que prescinda de la audiencia de pruebas.
9. El que deniegue el decreto o práctica de alguna prueba pedida oportunamente.

Los autos a que se refieren los numerales 1, 2, 3 y 4 relacionados anteriormente, serán apelables cuando sean proferidos por los tribunales administrativos en primera instancia.

El recurso de apelación se concederá en el efecto suspensivo, salvo en los casos a que se refieren los numerales 2, 6, 7 y 9 de este artículo, que se concederán en el efecto devolutivo.



conocerán de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación dictados en primera instancia por los jueces administrativos.

Sin embargo, esta Corporación considera que esta jurisdicción no es la competente para conocer del asunto en cuestión, en consecuencia, suscitará el conflicto negativo de competencia ante la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Valle del Cauca, propendiendo por la garantía de los derechos al acceso a la administración de justicia y el debido proceso de la demandante.

Al respecto, el CPACA en su artículo 168 de la Ley 1437 de 2011, respecto a la falta jurisdicción o competencia establece que:

“ARTÍCULO 168. FALTA DE JURISDICCIÓN O DE COMPETENCIA. *En caso de falta de jurisdicción o de competencia, mediante decisión motivada el Juez ordenará remitir el expediente al competente, en caso de que existiere, a la mayor brevedad posible. Para todos los efectos legales se tendrá en cuenta la presentación inicial hecha ante la corporación o juzgado que ordena la remisión”.*

Por su parte, el artículo 112 de la Ley 270 de 1996¹², en aplicación a lo dispuesto en el artículo 256 de la Constitución Política, señala que le corresponde a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura o a los Consejos Seccionales, según el caso, entre otros asuntos, dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones.

En virtud de lo anterior, a pesar de que el Juez Segundo Civil Municipal de Tuluá declaró su falta de jurisdicción y competencia para conocer del asunto por considerar que el certificado de tradición estipulaba que el bien inmueble en debate es de propiedad de una entidad pública (Municipio de Tuluá), y que el Juez Segundo Administrativo Oral del Circuito de Buga asumió el conocimiento del proceso argumentando

PARÁGRAFO. *La apelación solo procederá de conformidad con las normas del presente Código, incluso en aquellos trámites e incidentes que se rijan por el procedimiento civil.”*

¹² “Corresponden al Consejo Superior de la Judicatura o a los Consejos Seccionales, según el caso y de acuerdo a la ley, las siguientes atribuciones:

(...)

6. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones”.



de igual forma, que el bien inmueble objeto del litigio corresponde a un bien de propiedad del Municipio de Tuluá.

Esta Corporación considera que el presente proceso no es competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa, pues si bien según escritura pública nro. 169 del 23 de febrero de 1967 el terreno donde se encuentra ubicado el bien inmueble fue adquirido por el Municipio de Tuluá como un globo de tierra, con el fin de ser adjudicado mediante lotes de terreno a título de compraventa en favor de unos damnificados de una calamidad pública, no puede esta instancia desconocer que la demanda fue presentada por la Junta de Acción Comunal del Barrio Departamental, alegando que *“el predio antes relacionado aparece como de la Junta de Acción Comunal”* en los siguientes documentos: Certificado Catastral expedido por la Secretaria de Hacienda Municipal de Tuluá donde se relaciona como propietaria del lote ubicado en la carrera 20 # 12-63 identificado como la “Caseta Comunal”, entre otros documentos, como - Certificado Catastral Nacional del IGAC, - Su posesión acompañada de la protocolización de una mejoras realizadas por dicha junta y consignadas en la Escritura Pública nro. 858 del 30 de marzo de 1989, al igual que en la matrícula inmobiliaria nro. 384-0009700, - Facturas de pago de impuesto predial del año 2017, - Recibos de servicios públicos, etc.

Por lo tanto, si bien se entiende que fue el Municipio de Santiago de Cali quien adquirió en su momento el predio en cuestión, no es menos cierto que la demanda fue presentada ante la jurisdicción ordinaria bajo la figura de proceso verbal de Restitución de Bien Inmueble dado en Comodato Precario por la Representante Legal de la Junta de Acción Comunal del Barrio Departamental del Municipio de Tuluá, solicitando en su favor la restitución de la caseta comunal con el fin de cumplir con su objeto social de servir a la comunidad.

Resulta evidente, que al no ser la titularidad del bien lo que se cuestiona en este momento, resulta procedente que la Junta de Acción Comunal adelante ante la Jurisdicción Ordinaria dicho proceso, teniendo en cuenta que la Junta de Acción Comunal¹³ es una organización cívica, social, y comunitaria de gestión social, sin ánimo de lucro de naturaleza solidaria, con personería jurídica y patrimonio propio, integrada

¹³ Ley 743 de 2002



voluntariamente por los residentes de un lugar que aúnan esfuerzos y recursos para procurar un desarrollo integral, sostenible y sustentable con fundamento en el ejercicio de una democracia participativa.

De otra parte, considera la Sala que en cuanto a su legitimidad por activa de hecho se entiende demostrada con la presentación de la demanda y el interés que considera tener para la reclamación del bien objeto del litigio, además de tenerse en cuenta que tal como indicó el apelante el contrato verbal de comodato fue realizado entre la Junta de Acción Comunal y la señora Francys Derlys Vidales sin intervención del Municipio de Tuluá, es decir, que el planteamiento del problema jurídico se centraría entre la Junta de Acción Comunal como demandantes y los señores Francys Derlys Vidales y Ever Antonio Palacios como demandados.

Por lo analizado, la Sala encuentra procedente declarar la nulidad de lo actuado a partir del auto interlocutorio nro. 217 del 28 de mayo de 2019 inclusive, proferido por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Cali, al haberse actuado careciendo de jurisdicción para ello tal y como acertadamente se argumentó en el recurso de apelación, al insistir en que la jurisdicción no es la competente para dirimir este asunto.

En virtud de lo expuesto, considera la Sala que en aras de garantizar el acceso a la administración de justicia debió proponerse el conflicto de competencia de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley 270 de 1996, que será dirimido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Valle del Cauca al tratarse de un conflicto de competencia que se suscita entre distintas jurisdicciones, determinación que se surtirá en esta instancia atendiendo los principios de economía procesal y celeridad.

En consecuencia, se

RESUELVE:

PRIMERO.- DECLARAR la nulidad de lo actuado a partir del auto interlocutorio nro. 217 del 28 de mayo de 2019 inclusive, proferido por el Juzgado Segundo Administrativo de Guadalajara de Buga, por falta de Jurisdicción y competencia, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.



SEGUNDO.- PROVOCAR el conflicto de competencia ante Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Valle del Cauca, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

TERCERO. REMITIR por la Secretaría de esta Corporación el expediente al Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Valle del Cauca, para lo de su competencia y comuníquese lo aquí decidido al Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Buga.

Proyecto discutido y aprobado en Sala de Decisión de la fecha. Acta Número 39.

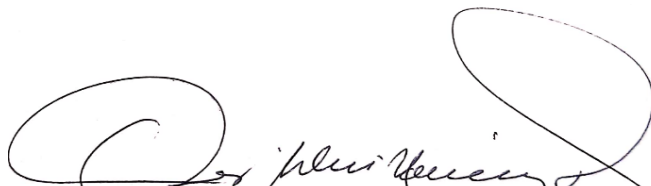
Notifíquese y Cúmplase,

Providencia discutida y aprobada en Sala de decisión de la fecha. Acta No. 39

Los Magistrados,



EDUARDO ANTONIO LUBO BARROS



OSCAR SILVIO NARVÁEZ DAZA



OMAR EDGAR BORJA SOTO